



MONTI
Laura
Mercedes
Firmado digitalmente por MONTI Laura Mercedes
Fecha: 2024.10.18 14:16:26 -0300

Ministerio Público
Procuración General de la Nación

S u p r e m a C o r t e :

-I-

A fs. 301/313 del expediente principal (al que se referirán las siguientes citas), la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba (Sala A) confirmó la sentencia de la instancia anterior y, en consecuencia, rechazó la demanda que había deducido la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC, en adelante) contra la AFIP, con el objeto de que se declare la nulidad de la resolución 672/12 (DI RCOR).

Explicó que, mediante el citado acto, el ente recaudador había rechazado la acción de repetición promovida por EPEC a fin de que se le restituyeran las sumas abonadas durante los períodos 2005/2012 en concepto de impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias (ICDB, en adelante), creado por ley 25.413.

Para así decidir, la alzada sostuvo que la EPEC es una entidad autárquica creada por ley de la Provincia de Córdoba, que se desempeña dentro del ámbito del Ministerio de Obras Públicas local.

Señaló que las referidas entidades integran los cuadros de la administración pública y presentan ciertas características que las definen: (i) personalidad, mediante la cual pueden adquirir derechos, contraer obligaciones y estar en juicio; (ii) patrimonio afectado al cumplimiento de sus funciones; (iii) fin público específico, que excede el mero interés general.

Luego de analizar la condición de la EPEC, la cámara se refirió a la normativa involucrada en la solución del pleito.

Así, recordó que el art. 2° de la ley 25.413 concede una exención de carácter subjetivo que alcanza a las cuentas y operatorias cuya titularidad pertenece al Estado en cualquiera de sus niveles, con exclusión expresa de los organismos y entidades enumerados en el art. 1° de la ley 22.016 que vendiesen bienes o prestasen servicios a terceros a título oneroso.

Agregó que este último dispositivo derogó todas las disposiciones de leyes nacionales que eximían o permitían capitalizar el pago de tributos nacionales, provinciales y municipales a las empresas formadas por capitales de particulares e inversiones de los fiscos nacional, provinciales y municipales y todo otro organismo nacional, provincial y municipal que venda bienes o preste servicios a terceros a título oneroso.

Señaló que, si bien el decreto 145/81 establece que ciertos sujetos no se hallan comprendidos en el art. 1° de la ley 22.016, ninguna de las excepciones allí contempladas resultaba aplicable a la EPEC. Por ello, concluyó que la actora no estaba exenta del ICDB.

En relación a la inmunidad fiscal de la Provincia de Córdoba invocada por la accionante, sostuvo el *a quo* que la incorporación del actual art. 5° de la ley 11.683 y la sanción de la ley 22.016 evidencian, de manera indubitada, la voluntad legislativa de incluir, dentro de las previsiones de la ley del ICDB, a las entidades autárquicas pertenecientes a las provincias, entre las que se encuentra la EPEC.



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

Por otro lado, rechazó la tacha de inconstitucionalidad de la ley 25.413 al considerar que la actora había fundado su planteo en la evaluación de sus ganancias, lo que configuraba, a juicio de la alzada, un hecho imponible gravado por otro tributo (impuesto a las ganancias), mas no por el discutido en autos.

-II-

Disconforme con tal pronunciamiento, a fs. 1/51 de las actuaciones obrantes en formato digital en el sistema de consulta de causas web del Poder Judicial de la Nación, la EPEC dedujo recurso extraordinario, cuya denegación dio origen a la presente queja.

En primer lugar, sostiene que la sentencia es arbitraria en la medida en que omitió el tratamiento de cuestiones planteadas oportunamente y conducentes para la solución del litigio. En especial, alega que la cámara sostuvo dogmáticamente la inaplicabilidad a la EPEC de las disposiciones del decreto 145/81, sin brindar razones para ello.

En ese sentido, aduce que goza de la dispensa prevista en el art. 2° de la ley 25.413, en razón de encontrarse excluida de las prescripciones de la ley 22.016, lo que torna procedente la repetición formulada. Sostuvo que ello es así por verificarse a su respecto las excepciones consagradas en el citado decreto 145/81.

Por otro lado, señala que la ausencia de análisis de la constitucionalidad de los arts. 1° de la ley 22.016 y 5°, último

párrafo, de la ley 11.683, priva a la EPEC de una sentencia que resguarde su defensa en juicio, el debido proceso y el derecho a una decisión fundada.

Añade que la ley 25.413 es inconstitucional, en cuanto sustrae del régimen de coparticipación de la ley 23.548 las sumas recaudadas por el ICDB.

Sostiene también que la gabela cuestionada resulta confiscatoria y vulnera el principio de capacidad contributiva, e indica que la prueba pericial producida demostró que el tributo absorbió una parte sustancial de su renta y patrimonio.

Agrega que, durante el período reclamado, recibió de la Provincia de Córdoba determinados importes en virtud del programa *"tarifa social"*, que tiene por objeto *"reducir los gastos de tarifas e impuestos de la vivienda de las familias que se encuentran bajo la línea de pobreza..."*, como así también sumas correspondientes al *"Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior"* (FEDEI), por lo que el hecho de que tales recursos resulten gravados por el ICDB implica un impedimento de la Nación en relación a las políticas sociales de la provincia.

-III-

Considero que el recurso interpuesto es formalmente admisible, pues se halla en juego la aplicación e interpretación de normas de carácter federal y la sentencia definitiva del superior tribunal de la causa es adversa al derecho que el apelante sustenta en ellas (art. 14, incs. 1° y 3°, de la ley 48).

Además, la circunstancia de que el superior tribunal de la causa no se haya pronunciado respecto de alguna de aquellas



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

cuestiones, a pesar de haberlo planteado oportunamente la actora, configura un supuesto de resolución contraria implícita que autoriza la apertura de la vía de excepción que prevé el art. 14 de la ley 48 (Fallos: 322:1201, entre muchos otros).

Por otro lado, pienso que corresponde examinar, en forma conjunta, las impugnaciones traídas a conocimiento de V.E., ya que las referidas a la alegada arbitrariedad en que habría incurrido el tribunal anterior y las atinentes a la interpretación de la cuestión federal son dos aspectos que guardan entre sí estrecha conexidad (conf. doctrina de Fallos: 321:2764; 323:1625).

Asimismo, en la tarea de establecer la correcta inteligencia que cabe asignar a normas de esta naturaleza, la Corte no debe ceñirse a las posturas del recurrente ni del tribunal apelado, sino que le incumbe realizar una declaración sobre el punto disputado, de acuerdo con la interpretación que rectamente le otorgue (Fallos: 323:1406, 1460 y 1566, entre muchos otros).

-IV-

A fin de lograr mayor claridad expositiva, procederé a estudiar los agravios del recurrente en el siguiente orden:

1. Que la EPEC goza de la dispensa prevista en el art. 2° de la ley 25.413 ya que, según postula, no se encuentra incluida en las disposiciones de la ley 22.016 por

aplicación de lo previsto en el art. 1° del decreto 145/81.

2. Que el art. 1° de la ley 22.016 y el art. 5°, último párrafo, de la ley 11.683, en cuanto *"habilitan al Estado Nacional a imponer tributos al Estado Provincial"*, resultan inconstitucionales.
3. Que la ley 25.413, por el destino de los fondos recaudados por el ICDB, es contraria a la Carta Magna.
4. Que el ICDB produjo, en el período reclamado, efectos confiscatorios, al absorber una parte sustancial de su renta y de su patrimonio.
5. Que la aplicación del gravamen sobre los montos recibidos por la EPEC en concepto de *"tarifa social"*, abonados por la Provincia de Córdoba y por el FEDEI, *"estorba las políticas sociales del Gobierno de la Provincia de Córdoba, violentando en sistema Federal que gobierna la República"*.

-V-

Como señalé, considero que un orden lógico impone analizar, en primer término, si la actora encuadra dentro de las exenciones establecidas en la ley 25.413.

A tal fin, creo oportuno recordar que el art. 2° de la ley 25.413 establece, en lo que aquí interesa, que: *"Estarán exentos del gravamen: a) Los créditos y débitos en cuentas bancarias, como así también las operatorias y movimientos de fondos, correspondientes a los Estados nacional, provinciales, las municipalidades y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e Instituto Nacional de Servicios Sociales para*



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

Jubilados y Pensionados, estando excluidos los organismos y entidades mencionados en el artículo 1° de la Ley 22.016...”.

Por su lado, el art. 1° de la ley 22.016 señala: “Deróganse todas las disposiciones de leyes nacionales, ya sean generales, especiales o estatutarias, en cuanto eximan o permitan capitalizar el pago de tributos nacionales, provinciales y municipales (impuestos, tasas y contribuciones) a: ...todo otro organismo nacional, provincial y municipal que venda bienes o preste servicios a terceros a título oneroso.”

A su vez, el art. 1° del decreto 145/81, reglamentario de la ley 22.016, prescribe que: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto N° 261/80, no se considerarán comprendidos en el artículo 1° de la Ley N° 22.016, aquellos entes u organismos del Estado, nacionales, provinciales o municipales, centralizados, descentralizados, autárquicos, reparticiones o dependencias que se encuentren en cualquiera de las situaciones siguientes: a) Que de sus normas de creación resulte que no poseen diferenciación patrimonial con el Estado, excepto que su objeto principal sea la realización de actividades de tipo empresarial, tanto comercial como industrial. b) Que cumplan como objeto principal funciones de: Policía, regulación de la actividad económica o financiera, educación, asistencia social, salud pública y/o investigación.” (art. 1°, subrayado agregado).

A la luz de estas disposiciones y para un correcto enfoque de la controversia, considero imprescindible, entonces, analizar el régimen jurídico de la EPEC.

Dicha entidad se encuentra regulada en la ley local 9.087 y ha sido creada como persona jurídica (art. 1°) "con capacidad para actuar pública y privadamente, con autarquía en el ejercicio de su gobierno administrativo, industrial, comercial y financiero. Para el cumplimiento de su finalidad podrá realizar por si todos los actos, contratos y operaciones que fueren necesarios, en el país o en el extranjero, salvo los que requieran autorización especial..." (art. 5°).

Tiene por finalidad "...satisfacer el interés general de la población en materia energética y de telecomunicaciones, coadyuvando al equilibrado y armónico desarrollo económico y demográfico de la Provincia. En función de ello regulará sus inversiones y proveerá a la racional expansión, a través de la utilización de sus instalaciones, preparando el adecuado abastecimiento de energía al menor costo posible." (art. 3°).

A su vez, dicho ordenamiento dispone que la citada entidad se encuentra "estructurada en la órbita del Ministerio de Obras Públicas. La gestión de La Empresa se desarrollará descentralizadamente, con el objeto de asegurar el máximo de eficiencia" (art. 7°).

En cuanto a sus actividades, el art. 4° indica que tiene a su cargo, entre otras, las siguientes:

a) Estudiar, proyectar, construir, comprar, explotar y administrar los medios de generación, transformación, transporte y distribución de energía y de telecomunicaciones y toda obra y actividad complementaria, conexas y auxiliares relacionadas con la prestación de dichos Servicios Públicos;

b) Aprovechar, con fines de producción de energía eléctrica y en acuerdo con los demás organismos competentes, las



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

fuentes hidráulicas y otras fuentes ubicadas en el territorio de la Provincia;

c) Generar, transportar, distribuir, comprar y vender energía y servicios de telecomunicaciones y realizar la prestación del servicio público de las mismas.

Con relación a su patrimonio, el art. 42 de la ley local dispone: "La Empresa financiará las operaciones inherentes al cumplimiento de su objeto, con los siguientes recursos destinados a la cobertura de su Presupuesto General Anual: a) Los originados por la venta de energía, los resultantes de la aplicación del régimen de suministros energéticos y por otros servicios prestados por La Empresa. b) Los ingresos por el arrendamiento y la venta de bienes, derechos y acciones. c) Los derivados del uso del crédito. d) Los importes de las contribuciones, donaciones legales, subsidios y subvenciones. e) Los aportes, préstamos o participaciones que correspondan a la Provincia o a la Empresa en la distribución de los recursos afectados en relación al Fondo Nacional de Energía Eléctrica y al Fondo de Compensación Tarifaria, y/o aquellos que se constituyan en un futuro para el desarrollo de los servicios energéticos o de telecomunicaciones y cuya percepción le fuera delegada por el Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba. f) Las asignaciones de la Ley de Presupuesto de la Provincia y de otras leyes. g) Los ingresos por intereses, actualización y recargos. h) Las asignaciones directas por vía impositiva que se sancionaron con destino a La Empresa. i) Todo

otro recurso que se derive de la actividad de La Empresa o se le asigne para cumplir su objeto".

A partir de las disposiciones citadas, es claro para mí que la EPEC es un ente descentralizado, con plena capacidad jurídica para actuar en la esfera del derecho público y privado. Asimismo, con el objeto de desarrollar las funciones encomendadas por el legislador, posee un patrimonio propio, integrado con recursos provenientes del ejercicio de sus actividades comerciales y, también, con aportes efectuados por la Provincia de Córdoba.

Ahora bien, llegados a este punto cabe recordar que, en materia de exenciones impositivas es constante el criterio conforme al cual deben resultar de la letra de la ley, de la indudable intención del legislador o de la necesaria implicancia de las normas que la establezcan (Fallos: 279:226; 283:61; 284:341; 327:5649 y 339:713, entre muchos otros).

También ha señalado la Corte que cuando una norma es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo, no cabe sino su directa aplicación (Fallos: 320:2145; 324:3345 y 340:905), pues la exégesis de la norma debe practicarse sin violencia de su letra y de su espíritu (Fallos: 308:1873; 316:2732; 324:3345 y 338:488).

Al amparo de estas consolidadas pautas hermenéuticas, pienso que no puede considerarse a la EPEC incluida en la dispensa prevista en el art. 2º, inc. a), de la ley 25.413, en tanto allí, como señalé, solo se exime a los "Estados provinciales" y la actora es un sujeto diferenciado que no se identifica con la Provincia de Córdoba (Fallos: 344:431; 332:936).



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

Por el contrario, considero que el organismo demandante se encuentra comprendido en las previsiones del art. 1° de la ley 22.016, sin que se verifiquen a su respecto, las excepciones consagradas en el decreto 145/81.

En efecto, en los términos del art. 1°, inc. a), del decreto 145/81, la EPEC presenta una "diferenciación patrimonial" con la Provincia de Córdoba, tal como surge de la ley local 9.087 y no desarrolla, como objeto principal, ninguna de las funciones enumeradas en el art. 1° de ese reglamento.

No tuerce mi razonamiento el criterio que, con fundamento en el art. 2°, pto. 8), de la ley provincial 8.599, propone el recurrente en cuanto a que el organismo demandante se encuentra excluido del art. 1° de la ley 22.016 "atento la ausencia de diferenciación patrimonial de la EPEC respecto del Estado provincial" (v. fs. 30 del recurso extraordinario).

El citado precepto, en lo que aquí interesa, determina que "El Poder Ejecutivo de la Provincia tendrá a su cargo la determinación de la política energética en el ámbito de su jurisdicción, la que deberá procurar satisfacer el interés general de la población en materia de energía eléctrica, armonizándolo con el desarrollo económico y social de la Provincia. A tal fin deberá:... 8.- Mantener dentro del Patrimonio del Estado Provincial y bajo su control, la actual Empresa Provincial de Energía de Córdoba".

Es claro para mí que ese precepto no altera la calidad de ente autárquico que reviste la accionante, ni tampoco su

"diferenciación patrimonial", sino que constituye un mandato dirigido al Poder Ejecutivo local, con el objeto de "mantener" a la EPEC dentro de los cuadros de la administración.

En efecto, la postura propuesta por la apelante supondría suprimir la personalidad y el patrimonio propio que la ley 9.087 le ha reconocido a EPEC, lo que equivaldría a presumir la inconsecuencia o falta de previsión del legislador (arg. Fallos: 315:1922; 321:2021 y 2453; 322:2189; 329:4007, entre otros), sin que -según asentada postura del Tribunal- quepa atribuir a las normas un alcance que implique la tacha de inconsecuencia en el órgano del cual emanan (Fallos: 310:1689, entre otros).

A mayor abundamiento, advierto que la propia recurrente reconoció poseer patrimonio y resultados propios y diferenciados del Estado local, al especificar que el tributo en crisis "representa un 23% de la pérdida de la EPEC en el período repetido e insumió el 8.5% de su patrimonio (\$ 936.528.031) al año 2010" (v. fs. 36 del recurso extraordinario, subrayado agregado).

Las circunstancias señaladas, en mi opinión, impiden encuadrar a la entidad actora dentro de las exenciones consagradas en el art. 2° de la ley 25.413.

-VI-

Sentado lo anterior, el siguiente agravio a tratar radica en el planteo de inconstitucionalidad que formuló EPEC respecto de los arts. 1° de la ley 22.016 y 5°, último párrafo, de la ley 11.683, en cuanto, según sostiene, "habilitan al Estado Nacional a imponer tributos al Estado Provincial".



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

Considero que tal pretensión no puede ser admitida.

Cabe recordar, como punto de partida, que la declaración de inconstitucionalidad de una norma implica un acto de suma gravedad institucional, de manera que debe ser considerada como *ultima ratio* del orden jurídico (Fallos: 302:457) y que es preciso poner de resalto que está a cargo de quien afirma la irrazonabilidad de una norma la fundamentación adecuada de su aseveración (Fallos: 345: 165).

En mi parecer, el planteo de la actora ha consistido en efectuar una tacha global de inconstitucionalidad por medio de la invocación abstracta y genérica de normas constitucionales, sin efectuar un mínimo examen razonado de los hechos de la causa.

En efecto, el organismo recurrente se limitó a mencionar ciertos dispositivos de la Carta Magna (arts. 17, 28 y 75, inc. 2°), pero omitió analizar y explicar, siquiera mínimamente, de qué modo esos preceptos resultaron vulnerados en el caso bajo análisis por la normativa atacada.

Por tales razones, dicha pretensión, desde mi punto de vista, se encuentra desprovista de la rigurosa carga argumentativa y justificatoria que exige la clásica doctrina de la Corte con arreglo a la cual el impugnante debe realizar una "*demostración concluyente*" de la discordancia "*substancial*" de la norma impugnada con respecto de la Constitución Nacional (Fallos: 100:318).

En tales condiciones, el referido agravio carece de la fuerza recursiva necesaria para demostrar las razones que sostienen la cuestión federal (Fallos: 323:2362).

-VII-

Por otro lado, la actora pidió que se declare la inconstitucionalidad de la ley 25.413 en cuanto, en su art. 3°, sustrae *"en favor del Tesoro Nacional, fondos que debieran estar afectados al régimen de coparticipación federal"* (págs. 5/6 del recurso extraordinario). En esta línea, añade que el Estado Nacional *"modificó de manera unilateral lo pactado entre Nación y provincias, al cambiar el destino otorgado a los fondos provinciales"* (v. fs. 17 vta./18).

Tal pretensión, como ha sido formulada, no puede prosperar. Así lo estimo, ya que, en mi visión, la EPEC omitió acreditar un derecho subjetivo o un interés legítimo, en tanto no demostró ni argumentó que el destino previsto por el legislador para los fondos recaudados por el ICDB, ocasione un perjuicio personal y concreto a sus derechos.

Por el contrario, considero que las razones en las que intenta sustentar la inconstitucionalidad esgrimida, antes que demostrar la lesión personal concreta que le acarrearía el art. 3° de la ley 25.413, tienden a tratar de preservar la situación de los estados provinciales quienes, según se desprende de su relato, serían los únicos afectados por la decisión del legislador federal de no integrar a la masa coparticipable del régimen instaurado por la ley 23.548, la suma recaudada por el ICDB (v. en especial el punto 6.5 de la demanda).



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

Por ello, advierto que los derechos que la actora pretende defender en este punto no aparecen nítidamente como directos y propios, sino más bien como pertenecientes a terceros, de quienes carece de representación adecuada (Fallos: 345:1312), por lo tanto, el planteo debe ser desestimado.

-VIII-

Despejado, entonces, que EPEC se encuentra fuera de la dispensa prevista en el art. 2° de la ley 25.413, corresponde abordar el agravio vinculado a los efectos confiscatorios que, a juicio del recurrente, produjo la gabela.

El tribunal apelado, al abordar el tratamiento de este punto, distinguió entre la materia gravada por el impuesto a las ganancias y por el ICDB. A partir de tal diferenciación, indicó que no resultaba posible fundar la confiscatoriedad en base a las pérdidas contables experimentadas en diversos ejercicios de la EPEC.

Cabe recordar que si bien en sus principios V.E. rechazó la posibilidad de que un tributo resultara inconstitucional por confiscatorio, al tratarse de un acto lícito del Estado que no podía ser confundido con la sanción prevista y prohibida por el art. 17 de la Carta Magna (arg. Fallos: 105:50), más adelante, y como es sabido, admitió que un tributo válidamente dictado por el Congreso Nacional podía, en algún caso concreto, absorber una porción sustancial del capital o de la renta alcanzados y perder, en consecuencia -y en esa

proporción- su validez constitucional (arg. Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, 332:1571, entre muchos otros).

Tal solución pretoriana del Tribunal tuvo por miras conjurar aquellas situaciones en las que el pago de uno o más gravámenes implicaban una lesión a la garantía de la propiedad individual, al reducir, más allá de lo constitucionalmente tolerable, sea la renta o el capital gravado.

En ese sentido, sostuvo esa Corte que el exceso alegado como violación de la propiedad debe resultar de una relación racional estimada entre el "valor del bien gravado" y el monto del gravamen (Fallos: 207:238; 322:3255 y sus citas, entre otras). Se ha requerido, asimismo, una prueba concluyente a cargo del actor (Fallos: 220:1082, 1300; 239:157).

En estos términos, pienso que asiste razón a la sentencia recurrida cuando sostiene que la EPEC, apartándose de la inveterada jurisprudencia del Tribunal, intenta sustentar su tacha de confiscatoriedad en un parámetro diferente al "valor del bien gravado" por el tributo cuestionado, lo que -adelanto- sella la suerte adversa de su pretensión.

En efecto, el art. 1º, inc. a), de la ley 25.413 prescribe: "*Establécese un impuesto, cuya alícuota será fijada por el Poder Ejecutivo nacional hasta un máximo del SEIS POR MIL (6%) que se aplicará sobre: a) Los créditos y débitos efectuados en cuentas -cualquiera sea su naturaleza- abiertas en las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras.*" (subrayado, agregado)

De la lectura del precepto transcrito, es claro para mí que el legislador diseñó el presupuesto de hecho adoptado



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

para hacer nacer la obligación de pago del ICDB sobre la base de los "créditos y débitos" efectuados en cuentas abiertas en las entidades regidas por la ley 21.526 (Fallos: 340:1884), sin atender o contemplar el "resultado del ejercicio" declarado por el contribuyente.

A partir de ello, considero que asiste razón a la Cámara, pues el ICDB y el impuesto a las ganancias resultan tributos distintos, cuyos efectos confiscatorios no pueden ser evaluados de manera idéntica.

La materia gravada del ICDB son los "créditos y débitos" en cuenta bancaria (es decir, los ingresos y salida de dinero). Ellos constituyen el "valor del bien gravado", baremo sobre el cual la tradicional jurisprudencia del Tribunal ha realizado el cotejo a fin de evaluar si el pago del tributo producía la sustancial absorción que lo privaba de su carácter de tal, para transformarlo en un despojo (Fallos: 207:328; 220:1082; 322:3255, entre otros).

El criterio de la recurrente, quien sustenta la confiscatoriedad del ICDB sobre un parámetro -resultado del ejercicio- que difiere del "valor del bien gravado" por ese tributo, impone el rechazo de su planteo.

-IX-

Por último, corresponde abocarse a los cuestionamientos formulados por la EPEC referidos al cobro del ICDB sobre los

fondos que le transfirió la Provincia de Córdoba como consecuencia del "*Programa Tarifa Solidaria*" y del FEDEI.

Se encuentra fuera de debate que, en el período cuestionado, la EPEC recibió determinados importes en virtud de los conceptos mencionados en el párrafo anterior, sobre los que se retuvo el ICDB.

En relación al primero de aquéllos, cabe señalar que, según se desprende de la documentación obrante en la causa, la Provincia de Córdoba, en el marco del Programa de Reconstrucción Social, instauró la "*tarifa social solidaria*" del servicio eléctrico, con el objetivo de "*resguardar el bienestar y calidad de vida de los consumidores residenciales más desprotegidos por la crisis económica, tendiente a garantizar dos aspectos esenciales, el acceso al servicio y el consumo... en nivel de igualdad con otros sectores de la comunidad*" (v. fs. 89).

En ese marco, EPEC y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba suscribieron un convenio (v. fs. 89/91) por el cual el gobierno provincial tomó "*a su cargo el sesenta por ciento (60%) del costo derivado de la aplicación de la tarifa solidaria... implementada por EPEC*" (art. 1°). A tal fin "*La EPEC deberá presentar y documentar los cálculos correspondientes para todos los usuarios y beneficiarios de la tarifa solidaria mediante planillas discriminatorias, remitiendo al Ministerio, a través de su Dirección de Coordinación Administrativa, informe de las diferencias resultantes para cada tipo de beneficiario... sobre tal base, el Ministerio realizará las transferencias correspondientes al porcentaje establecido...*" (art. 4°).



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

Por su lado, en referencia al FEDEI, el art. 33 de la ley 15.336 señala, en lo que aquí interesa, que dicho fondo "...será administrado por la Secretaría de Energía y Combustibles y se aplicará para: a) Aportes y préstamos a las provincias para sus planes de electrificación, siempre que se encuadren en los planes aprobados con intervención del Consejo Federal de la Energía Eléctrica y no graven el consumo de electricidad para otros fines que no sean exclusivamente de desarrollo de energía eléctrica. Para acogerse a estos beneficios, las provincias deberán establecer tarifas que contemplen la amortización de tales aportes. Las sumas recaudadas en tal concepto deberán destinarse exclusivamente a la renovación, ampliación de plantas existentes o a la ejecución de redes de electrificación, o al reintegro, en su caso, de los respectivos préstamos...".

En tales condiciones, entiendo que resulta aplicable la doctrina de Fallos: 327:5012; 334:891 y 346:613, en especial, las razones vertidas en el capítulo V del dictamen de esta Procuración General en la primera de las causas citadas, compartidas por esa Corte en su sentencia.

En efecto, las sumas transferidas por la Provincia de Córdoba a su ente autárquico para solventar los gastos derivados de la implementar y aplicar la "tarifa social" del servicio eléctrico, como así también las giradas en concepto de FEDEI, que tienen por objeto la realización de obras de mejora en el servicio de energía eléctrica, representan, en mi parecer, una actividad gubernativa típica de la Provincia, consensuada con el

Estado Nacional en este último caso, quien actuó con plena jurisdicción y en ejercicio de un derecho emanado de su naturaleza constitucional, fundado a su vez en el deber de "*promover el bienestar general*" establecido en el Preámbulo de la Carta Magna.

Admitir que los importes transferidos por la Provincia a su ente autárquico en concepto de tarifa social y FEDEI puedan ser disminuidos como consecuencia del cobro del ICDB implicaría aceptar, en estas particulares condiciones, que una actividad gubernativa propia del estado local resulte menoscabada por la incidencia directa ("*direct burden*") de un gravamen nacional, lo cual -desde mi punto de vista- representaría, además del desconocimiento del principio de solidaridad federal, una palmaria interferencia del poder nacional sobre el local, junto a una inadmisible limitación de su autonomía (arg. Fallos: 18:162; 23:560; 173:128; 186:170; 224:267; 226:408; 246:237; 247:325; 249:292; 250:669; 319:998; 320:1302; 327:1083).

Cabe recordar, para concluir, que es inveterada jurisprudencia de V.E. que, de acuerdo a las especiales características con que la Constitución Nacional ha revestido la configuración político institucional de naturaleza federal, la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la Nación y las Provincias, debiendo, en consecuencia, ser interpretadas las normas de aquélla de modo que las autoridades de la una y de las otras se desenvuelvan armoniosamente, evitando interferencias o roces susceptibles de acrecentar los poderes de gobierno central en desmedro de las facultades provinciales y viceversa, y



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

procurando que actúen para ayudarse y no para destruirse
(Fallos: 186:170; 271:186; 286:301; 293:287; 296:432).

En conclusión, pienso que corresponde revocar la
sentencia recurrida y admitir la demanda únicamente en lo
referido a la aplicación del ICDB sobre las sumas recibidas por
la EPEC en concepto de "*tarifa social solidaria*" y FEDEI.

-X-

En virtud de lo expuesto opino que debe declararse
formalmente admisible el recurso extraordinario deducido,
revocar el pronunciamiento apelado de acuerdo a lo establecido
en el acápite IX y confirmarlo en lo restante por los
fundamentos aquí brindados.

Buenos Aires, de octubre de 2024.